



El ataque a una heladería de Barcelona acusada de “discriminación lingüística” puso de relieve cómo el secesionismo volvió a poner su mira en este asunto.

JOSÉ TOMÁS TENORIO LABRA
Corresponsal en España

Con el apoyo al independentismo en niveles mínimos, y sin ninguno de sus partidos al mando de Cataluña, el secesionismo vuelve a apostar por una vieja herramienta: el uso del catalán como arma política. El boicot a un comercio de Barcelona por no atender en este idioma puso el foco en las medidas a las que están apelando los separatistas para que el catalán ocupe espacios que van desde los colegios, la administración pública, y hasta a nivel oficial en la Unión Europea, y que genera fuertes tensiones.

Acusada por un concejal del partido Esquerra Republicana (ERC) de “discriminación lingüística”, la heladería argentina Dellaostia se convirtió en el blanco inesperado del independentismo luego de que sus trabajadores no atendieran en catalán a una mujer, pareja del concejal, dado que no manejaban el idioma. La denuncia del político se viralizó rápidamente en redes sociales, donde grupos independentistas llamaron a un boicot contra la heladería, que fue vandalizada y rayada con mensajes como “fascistas de m****” y stickers con el lema “este local no respeta el catalán”.

Organizaciones ligadas al independentismo político como Omnium Cultural y Plataforma Per la Llengua incluso tacharon a la heladería como ejemplo de “catalanofobia”, mientras que el exdiputado y exlíder del partido secesionista Candidatura d'Unitat Popular (CUP) Antonio Baños aseguró que esa tienda “es nuestro enemigo hasta que cierre”. La número dos de ERC, Elisenda Alamany, respaldó en tanto la campaña contra el comercio, al afirmar que se trataba de defender el derecho de “pedir un helado en catalán en nuestra ciudad”.

El partido independentista de derecha populista Alianza Catalana aprovechó para anunciar, solo unos días después del incidente, una campaña piloto aplicada en Barcelona para abrir canales de denuncia contra comercios en los que no se atiende en catalán.

La controversia se da en momentos en que el independentis-



LA HELADERÍA DELLAOSTIA, en el barrio barcelonés de Gràcia, fue denunciada en redes por supuesta discriminación lingüística respecto al catalán.

mo carga con fuerza en la defensa del catalán como su principal arma política. Tras lograr objetivos comunes en los últimos dos años como la aplicación de una amnistía a los líderes del fallido intento de independencia de Cataluña en 2017, y la aprobación del gobierno de Pedro Sánchez a transferir a la región competencias especiales en materia migratoria y fiscal, el tema del uso del catalán se alza por ahora como la única gran bandera que aglutina a todos los sectores del secesionismo.

Una decisión judicial muy esperada

El inicio del nuevo período legislativo en Cataluña tras las vacaciones de verano (boreal) ya tiene como gran foco de atención al Tribunal Constitucional, del

que se espera un fallo respecto a la obligatoriedad de impartir al menos un 25% de clases en castellano en los colegios de la región. La decisión —que según medios locales podría conocerse en pocas semanas— ha sido objeto de tensiones en los últimos meses, con llamados de dirigentes de partidos y asociaciones independentistas a que el gobierno catalán desconozca el fallo si es que este obliga a un mínimo de clases en castellano.

Pero tal acción sería compleja para el gobierno que lidera Salvador Illa, del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), que como agrupación no independentista se ha comprometido con el respeto al marco normativo español. Sin embargo, su Ejecutivo depende del apoyo que le entrega ERC en el Parlamento local,

formación que está entre las que exige que, sin importar los fallos de la justicia española, la educación se imparta en catalán.

“Esto es un tema que el independentismo le ha colado al gobierno de Illa en distintos ámbitos, como forma de presión y también como forma de mostrar actividad hacia sus bases, aunque está perfectamente demostrado que el catalán y el castellano coexisten bien en Cataluña”, afirma Artur Jordá, profesor de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Lérida.

El gobierno del PSC acordó en los últimos meses con el independentismo programas como el Pacto Nacional per la Llengua, que destina 250 millones de euros para aumentar el uso del catalán en la administración pública y el mundo privado, incluso con

la promoción de cláusulas de contratación que impongan el uso del catalán como requisito.

Idioma a la baja, al igual que el independentismo

Las políticas para proteger el uso del catalán se dan en un contexto de disminución del porcentaje de personas que dicen dominar el idioma en Cataluña. Según la Encuesta de Usos Lingüísticos publicada en febrero de este año, el catalán ganó más de 260.000 nuevos hablantes desde 2018, año con los últimos datos comparables, pero retrocedió 2,5 puntos porcentuales como lengua materna o primaria, con solo un 29% de la población en ese grupo.

Sin embargo, la encuesta también reveló que el catalán sigue

VIGILANCIA

El gobierno local impulsa un programa de 320.000 euros para enviar a miembros de la administración a evaluar el uso del catalán en comercios y bares.

gozando de un amplio dominio en la población, con un 93% que lo entiende y un 80% que lo sabe hablar. A su vez, el estudio reveló que el castellano también retrocedió en cuanto a hablantes del idioma como lengua materna, de un 52,7% en 2018 al 49,2% en 2025, por lo que especialistas apuntan más al aumento de la migración en Cataluña que a una imposición del castellano por sobre el catalán.

“Es correcto que haya preocupación y que se quiera proteger al catalán, pero no por medio de una imposición al castellano. Primero porque eso es imposible, y segundo porque solo polariza y hace que el catalán cobre un significado político que no tiene que tener. Pero quizás es justo eso lo que quieren hacer los partidos independentistas, que han perdido mucho terreno y ven en la polarización una forma de movilizar a sus votantes”, explica Marc Gil, especialista en lengua y comunicación política de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Es que el independentismo pasa por uno de sus momentos más bajos desde el fallido intento de independencia de 2017, tras perder en 2024 la mayoría parlamentaria entre todos los partidos del sector por primera vez en 40 años, lo que permitió al PSC liderar el gobierno. El apoyo en encuestas a la idea de la independencia se sitúa a su vez en torno al 40%, uno de sus peores datos en años.

Aún así, líderes secesionistas como Carles Puigdemont, del partido Junts per Catalunya, mantienen su apuesta por el catalán con presiones constantes contra líderes de la Unión Europea (UE) y contra el gobierno de Pedro Sánchez para que Bruselas adopte el catalán como idioma oficial.

La iniciativa es parte de los compromisos que la administración de Sánchez tomó con Junts para obtener su apoyo en el Congreso, vital para que el líder socialista lograra un nuevo gobierno en 2023, pero es una “demostración del populismo al que se puede llegar en el independentismo en su afán de venderse como únicos defensores del catalán, porque es una idea irrealizable y que, en el escenario actual, no suma nada”, dice Gil.